

PROGRAMA
SOCIALISTA
PARA

*Un
gobierno
de los
trabajadores*

2018-2022

CTADURA EN LA
SA PRIVADA

TRASEP
SECTOR PRIVADO

Partido de los
Trabajadores



INTRODUCCIÓN

La actual situación de nuestro país demuestra que los empresarios y sus partidos son incapaces de gobernar para los intereses de los trabajadores. La única salida que plantean todos los partidos de los empresarios es que la crisis la carguemos nosotros, los trabajadores, sobre nuestras espaldas. El aumento del desempleo, la creciente violación de derechos laborales o los tarifazos son ejemplos claros de esto.

De hecho, la pretendida “salida” que proponen estos partidos no es más que la profundización de este modelo que nos tiene en la ruina. Proponen más TLC, más excepciones para las empresas, más “libre comercio”, más apertura y desregulación. Proponen más impuestos regresivos que recaen sobre el pueblo trabajador. Lo que proponen es que la mayoría nos soquemos la faja para que una minoría no pierda sus escandalosos privilegios.

Los hechos son claros: si los partidos de los empresarios siguen gobernando (a costillas de todos y para un pequeño grupo de privilegiados), la miseria va a seguir aumentando y la situación va a ser cada vez más difícil. Un eventual gobierno del PLN, del ML, del PAC o del PUSC simplemente seguiría destruyendo las conquistas sociales, los derechos laborales, nuestro sistema de pensiones, el medio ambiente e incluso la propia soberanía del país.

En el caso del Frente Amplio consideramos que ha demostrado no ser muy diferente del PAC; este periodo se ha dedicado a apoyar al gobierno casi incondicionalmente. Sus propuestas se quedan a medias, pues se limitan a plantear reformas dentro del sistema capitalista, y no plantean puntos vitales como la ruptura con el TLC, el cese de pago de la deuda pública, la nacionalización de los medios de producción estratégicos, etc.

Hacemos un llamado a que voten por nuestro partido, pues queremos llevar trabajadores socialistas a la Asamblea Legislativa que puedan defender incansablemente una agenda de la clase trabajadora. Queremos tener luchadores comprometidos, que denuncien lo que sucede ahí, opuestos frontalmente a la agenda de los partidos empresarios. Estamos llamando a que voten, pues queremos disputar las elecciones contra las “opciones” políticas de los empresarios, reivindicando el hecho de que los trabajadores podemos y debemos gobernar.

Sin embargo, más que votar, nuestro llamado es a organizarnos y luchar día a día por cambiar nuestra situación. Votar no es suficiente para la clase trabajadora, sino que debemos organizarnos en las empresas, en los barrios y comunidades. Debemos movilizarnos, luchar por defender nuestros salarios y nuestras conquistas.

Nuestro llamado no es solo a votar por una opción socialista, sino tam-

bién a construir con nosotros esta herramienta de lucha y organización para la clase obrera. Queremos que la clase trabajadora costarricense, nicaragüense y de todas las nacionalidades nos acompañe en esta lucha diaria por un gobierno de los trabajadores, que ni empieza ni termina en las elecciones. Nuestra invitación es a que entren a construir el PT con nosotros, asumir la tarea de organizar y movilizar al resto de los trabajadores cotidianamente para defender sus intereses.

CONTRA LA DICTADURA EMPRESARIAL: ORGANIZAR SINDICATOS PARA LUCHAR POR NUESTROS DERECHOS

En nuestro país existen niveles altísimos de violación de derechos laborales. Un tercio de la población trabajadora no recibe el pago del salario mínimo; 3 de cada 10 trabajadores no cuenta con seguro social o de riesgos de trabajo, y alrededor de la mitad no recibe el pago de horas extra.

Estas cifras son mucho peores en regiones como la atlántica, norte y choro-tega, donde cerca de la mitad de la población no ve cumplido ninguno de estos derechos.

La razón de este altísimo incumplimiento en los derechos laborales es expresión de una dictadura del sector empresarial que impone sus propias reglas más allá de las leyes laborales del país.

La destrucción de la mayoría de sindicatos en el sector privado, causada por una represión y persecución sindical aún vigente, explica por qué apenas un 2% de esta fuerza de trabajo se encuentre afiliada a un sindicato.

Además, el Código de Trabajo favorece la represión de los patronos contra la organización sindical mediante artículos como el 85, el cual permite el despido de un trabajador sin justificación. Estos y otros mecanismos permiten a los capitalistas imponer condiciones salariales y laborales de miseria contra los trabajadores sin toparse con la menor resistencia.

Esta dictadura ha sido consolidada a partir de hitos como la proscripción del Partido Vanguardia Popular, el asesinato de dirigentes obreros como los del Codo del Diablo y la disolución de cientos de sindicatos de la CTCR al término de la guerra civil del 48; o como la brutal represión a las huelgas y la ofensiva que acabó con los sindicatos en las bananeras del atlántico y la zona Sur a comienzos de los años ochenta.

Ante esto proponemos:

Construir sindicatos en todas las ramas productivas del sector privado que sirvan de herramienta para defender los derechos laborales básicos de la legislación y luchar por nuestros intereses como trabajadores

contra los intereses de los patronos. Es por esto que seguiremos organizando SITRASEP como lo hemos hecho en los últimos años en las plantaciones piñeras del país y en otras fábricas.

Luchar por convenciones colectivas, impulsadas por esos sindicatos mediante la huelga para mejorar las condiciones de trabajo de toda la clase trabajadora.

Luchar por una reforma al Código de Trabajo para eliminar todos los artículos, incluidos los de la Reforma Procesal Laboral, que limitan, restringen y buscan estrangular el derecho a huelga.

JORNADA DE 40 HORAS Y PROHIBICIÓN DEL DESPIDO PARA ACABAR CON EL DESEMPLEO

Nuestro país reporta un 9,6% de desempleo, el segundo más alto de América Latina. Sin embargo, dicho número no refleja la verdadera gravedad del problema, ya que excluye a cientos de miles de personas que no figuran dentro de esta categoría y que se ubican como “desalentados”.

Según el INEC, estos desalentados dejaron de buscar empleo y ya no figuran en la fuerza de trabajo. Entre sus razones se encuentran el haber buscado trabajo por mucho tiempo y no haberlo encontrado o haber tenido que hacerse cargo del cuidado de algún familiar.

Estudios de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional situaban la suma de desempleados y desalentados en unos 415 mil, equivalente a un 18% de la población.

La cara oculta de esta situación es la política de los empresarios de despedir y no contratar a más empleados, argumentando problemas financieros cuando siguen llenándose los bolsillos de ganancias.

A esto se suma el que produzcan con menos trabajadores de los requeridos, intensificando los ritmos de trabajo e imponiendo jornadas extensas de hasta más de 10 horas, sin pago de horas extras.

Todo esto lo logran gracias a una política antisindical descarada que se ejecuta bajo la complicidad del gobierno. Todo intento de organización de los trabajadores es perseguido por los patronos con todas las herramientas legales e ilegales a su disposición.

Ante esta situación proponemos:

Nueva jornada laboral de 40 horas semanales que reparta todo el trabajo existente entre todos los trabajadores. Para las labores insalubres

dicha jornada será de 36 de horas.

Lucharemos por una nueva jornada laboral de 40 horas semanales sin reducción de salario que permita que las horas de trabajo que el patrón le impone a sus empleados sin pago alguno, se transformen en nuevos empleos. Con esta medida se crearía 1 nuevo empleo por cada trabajador actual, es decir un aumento del 20% de los trabajadores actuales.

Decreto de emergencia para la prohibición de despidos

Los patronos despiden y contratan trabajadores a su antojo, todo basado en su deseo de maximizar sus ganancias.

Cuando un patrono dice que va a despedir porque la producción ha bajado, nadie revisa los números de la empresa, nadie sabe cuánto están ganando realmente.

Es por esto que, como primera medida del gobierno, haremos un decreto de emergencia de prohibición de despidos, para garantizar que ningún patrono mande a las familias trabajadoras a la miseria por el mero deseo de mantener sus jugosas ganancias.

Apertura de libros contables de las empresas y levantamiento del secreto bancario para determinar las ganancias que estas poseen y la forma en que deben ser distribuidas para preservar el empleo.

COMBATE AL DESEMPLEO Y LA POBREZA DE LAS MUJERES

Las mujeres forman parte de los sectores más afectados con el desempleo y la violación a los derechos laborales. Se calcula que solo un 36% de las trabajadoras reciben todas las garantías laborales frente a un 42% de los hombres, y que solo un 31% de las mujeres asalariadas en Costa Rica cuenta con un seguro de salud.

Además, uno de los grandes problemas que las afecta es la desigualdad salarial, ya que las mujeres reciben en promedio de un 28% menos salario que los hombres, aun teniendo escolaridad similar.

Entre 120.000 y 150.000 personas estarían disponibles para incorporarse a la fuerza de trabajo si cambiaran algunas circunstancias que hoy las alejan del mercado laboral. En el caso de las mujeres, la principal razón está relacionada con el recargo de las labores domésticas y de cuidado. Es por esto que los centros de cuidado para niñez o adultos mayores, así como la creación de comedores y lavanderías comunales, son servicios indispensables para mejorar las posibilidades de inserción laboral de las mujeres.

Aunque el país cuenta con una Red de Cuido, su servicio es insuficiente para atender la alta demanda de la población, y además funciona bajo mecanismos de contratación privada, en los que el Estado transfiere altas sumas de dinero para la administración de los centros de cuidado o directamente a centros privados. Tan solo en 2016, el Estado invirtió más de \$70.000 millones al pago de subsidios, y de estos, \$19,169 millones se destinaron a centros privados.

Por eso proponemos:

Fin de la desigualdad salarial. Igual salario por igual trabajo.

Ni un despido más para las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

Ampliación de la licencia de maternidad a 6 meses e igual periodo para las licencias de paternidad.

Creación de guarderías y centros de cuidado públicos y gratuitos en los barrios, financiados a través de los impuestos a las zonas francas.

Creación de centros de cuidado en las empresas.

Socialización de las tareas domésticas a través de la creación de comedores y lavanderías comunales.

AUMENTO SALARIAL DEL 10% DE EMERGENCIA PARA HACER FRENTE AL COSTO DE LA VIDA

Durante estos últimos años el aumento de los servicios y del costo de la vida han sido gigantescos. Basta con ver lo que ha subido la electricidad, los pasajes, el agua, la recolección, entre otros. Mientras tanto el salario de los trabajadores se ha estancado, el desempleo no ha dejado de aumentar, y gozamos cada vez de menos derechos laborales. La pérdida del valor adquisitivo de nuestros salarios es en buena parte la causa del aumento de la pobreza en nuestro país. Esta pérdida ha sido facilitada por la falta de sindicatos y de organizaciones políticas que defiendan los intereses de la clase trabajadora. Las empresas se han aprovechado de esta falta de organización para atacar nuestros salarios y condiciones laborales.

Por ejemplo, los “aumentos” salariales de los últimos semestres han sido bofetadas para los trabajadores, los cuales no alcanzan ni para cubrir el alza de un solo servicio. Sin embargo, al no haber organizaciones sindicales no existe oposición ni debate alrededor de este tema, y se permite que el salario siga perdiendo terreno.

Los partidos empresarios proponen simplemente parches para esta situación, pero ninguno de ellos se propone aumentar el valor del nuestro salario. Esto se debe a que estos partidos defienden los intereses de los empresarios, que en el marco de la crisis tienen la política opuesta: rebajar el valor de nuestro salario y “reducir costos” que terminan afectando a nuestras familias.

Desde el PT proponemos un programa de lucha contra la pobreza que parta del problema salarial, del empleo y de la necesidad de luchar para que aquellos que vivimos de nuestro salario podamos llegar a fin de mes y tener condiciones de vida dignas.

Por un aumento de emergencia del 10%

Proponemos luchar por un aumento salarial de emergencia de 10% para todos los trabajadores. Eso permitiría que el valor adquisitivo de nuestro salario recupere algo del terreno que ha perdido en estos últimos meses.

Nuevo salario mínimo vital para trabajadores y pensionados, basado en una nueva canasta básica de bienes y servicios definida por las organizaciones de trabajadores y populares para garantizar todas nuestras necesidades.

El actual salario mínimo se basa en una canasta básica que no tiene nada que ver con lo que realmente gastamos las familias trabajadoras. No hay forma de llegar a fin de mes con un salario basado en la actual canasta, a la que además le han ido quitando cada vez más productos. Proponemos una redefinición del salario mínimo, basado en una canasta básica discutida por los trabajadores y comunidades, que parta de las verdaderas condiciones que enfrentamos.

UN PLAN DE OBRAS PÚBLICAS PARA FRENAR LA CRISIS SOCIAL, LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD

El pueblo de Costa Rica lleva más de una década de estar sufriendo los efectos de niveles escandalosos de pobreza que han oscilado en alrededor de 21%, con algunos años que baja y otros que sube. De igual manera se ha comportado la pobreza extrema que lleva años alrededor del 6%. Esta pobreza afecta especialmente a las mujeres, quienes están al frente del 43.5% de los hogares pobres.

Lo contradictorio de todo esto es que Costa Rica lleva 25 años de “crecimiento” sostenido de la economía. Este crecimiento se ha mantenido de forma más o menos estable en alrededor de un 4.5% en los últimos diez años.

La consecuencia natural de un crecimiento sostenido de 4.5% y un estancamiento en la pobreza alrededor del 21% es el aumento de la desigualdad. En los últimos 10 años los ricos de Costa Rica son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Entre 1990 y 2010 el coeficiente de Gini (indicador de la desigualdad) ha aumentado de 0.38 a 0.43. Pero estos números se hacen innecesarios y se tornan fríos ante la palpable realidad de la pobreza y desigualdad que vemos día a día en nuestras calles.

Esta concentración cada vez mayor de la riqueza se ha hecho en gran medida a costa del Estado, mediante el enriquecimiento de un sector empresarial a costa de los negocios concesionados y entregados por el gobierno. Mientras tanto, otro grupo importante de empresarios se beneficia de la exoneración fiscal de los regímenes especiales como las zonas francas, y el conjunto de los ricos gozan de una complacencia estatal que recarga los tributos sobre la clase trabajadora mediante el impuesto de ventas.

En los últimos años se vienen recortando sistemáticamente los gastos sociales; ejemplo de esto fueron los recortes en el 2017 al PANI, a los CEN-CINAI afectando el servicio de 620 centros, un estancamiento en el crecimiento del FEES (Fondo Especial para la Educación Superior) y el incumplimiento sistemático del mandato constitucional de asignación de 8% del PIB para la educación pública.

Todos estos recortes se hacen presionados por el déficit fiscal, que ha venido creciendo sistemáticamente; para el 2018 el déficit fiscal será del 44% del presupuesto, lo que significa endeudar al país por 4.1 billones de colones más.

Mientras el gobierno continúa año tras año recortando los gastos sociales, se mantiene fiel pagadero de la deuda pública, principal elemento del gasto público, consumiendo una tercera parte del presupuesto anual del gobierno. El 46.5% del presupuesto destinado al pago de la deuda pública se dirige al pago de intereses. Es decir, el 15% del presupuesto nacional del 2018, 1,39 billones (millones de millones) de colones, se irán directamente a las ganancias de los banqueros y acreedores de la deuda pública.

Esta situación genera una crisis social que empuja cada vez más a los jóvenes del país a buscar una salida ante su miseria en la distribución y venta de drogas. Esta realidad, sumada a una política de persecución a la distribución (menudeo) y transporte de drogas, tiene abarrotadas nuestras cárceles de jóvenes, mientras que los grandes señores del narcotráfico gozan de la más injusta impunidad.

Ante esta situación de crisis social del país, proponemos las siguientes medidas:

Impulsar un plan de inversión en obra pública y generación de empleo financiado por el cese en los pagos de la deuda y mayores impuestos a las empresas y grandes actividades lucrativas del país.

Aumentar el presupuesto para salud, educación, transporte, guarderías, comedores públicos y acceso al deporte y el arte en los barrios.

Todo esto se logrará a partir de los recursos generados con la suspensión de los pagos de la deuda, el fin de las concesiones privadas que le cuestan muy caro al Estado y la reforma fiscal que cobre a los ricos.

QUE LAS EMPRESAS Y EL GOBIERNO PAGUEN SU DEUDA PARA RESCATAR A LA CCSS

Es un hecho que los servicios de salud pública en nuestro país pasan por una profunda crisis evidente en todos los niveles de atención. Así lo ejemplifican la falta de camas en los hospitales, las largas filas para recibir la atención en los EBAIS, las listas de espera para especialistas, o aun peor, para la realización de cirugías, la calidad y amplitud de los medicamentos ofrecidos, entre otros.

El gobierno, así como el resto de partidos políticos, viene sosteniendo que la crisis en los servicios de salud es culpa de los altos salarios que se pagan en la CCSS y del crecimiento de la planilla de empleados.

Para nosotros la incapacidad de la Caja para mantener su planilla y el deterioro de sus servicios son síntomas del desfinanciamiento al que los gobiernos de los empresarios vienen sometiendo a la institución.

A continuación, enumeramos lo que para nosotros son las verdaderas causas de la crisis de la CCSS:

Millonarias deudas acumuladas del Estado: actualmente adeuda alrededor de 28 000 millones de colones a la CCSS, que corresponden centralmente al financiamiento de los EBAIS y deudas con el fondo de pensiones. El Estado traspasó estos servicios a la CCSS durante los noventa con el compromiso de asignar el financiamiento correspondiente, pero este nunca llegó, por lo que los EBAIS terminaron siendo asumidos por la CCSS, recortando así la porción del presupuesto necesaria para la contratación de nuevos especialistas e infraestructura.

Morosidad y evasión de los patrones con la CCSS: Hoy, según la CGR, esta morosidad alcanza unos 105 mil millones de colones. Esto sin mencionar el dinero que no se recauda debido a que al maquillaje que los empresarios hacen en sus planillas para evadir pagos.

El deterioro laboral del asegurado: Actualmente la CCSS debe dar respuesta a problemas de salud cada vez más complejos y de toda la población. El problema es que esto está teniendo que ser financiado por cada vez menos trabajadores asegurados debido al crecimiento del desempleo

y la informalidad.

Corrupción y planes de privatización: Las millonarias contrataciones de equipo y laboratorios que la CCSS debería poder suplir, así como pérdidas generadas en los fondos de pensiones invertidos en bonos con poco interés del Estado son un ejemplo de esto. La concesión de los EBAIS, tal y como viene sucediendo con 36 de ellos entregados a la UNIBE, y el crecimiento de la salud como negocio para los empresarios y como un carísimo y último recurso para los trabajadores, también hacen parte de esta crisis.

A pesar de lo claras que están las responsabilidades de la crisis financiera y de servicios de la CCSS, las acciones tomadas por el gobierno para “rescatar” a la institución han sido todas perjudiciales para la calidad de los servicios, orientadas hacia su privatización y recargadas sobre los hombros de los trabajadores de la salud.

La crisis de la CCSS no es responsabilidad del pueblo costarricense. La verdadera salida es que esta sea asumida por los verdaderos culpables que han sido los gobiernos del bipartidismo y los empresarios. Para esto proponemos:

¡Que las empresas y el gobierno paguen toda su deuda con la CCSS!

Cárcel y confiscación de bienes para los grandes evasores de la CCSS

Que se obligue a los patrones a asegurar a todos sus empleados bajo pena de cierre de establecimientos.

Que todos los servicios de salud en concesión sean asumidos por la CCSS sin indemnización de contratos.

Un plan de inversión en obra y personal de salud para erradicar las filas y las listas de espera.

Que este plan sea financiado con impuestos a las grandes empresas y la suspensión del pago de la deuda.

¡Por la nacionalización de todos los centros de salud privados!

FIN DE LA CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA Y NACIONALIZACIÓN DEL TRANSPORTE PARA TENER CARRETERAS Y SERVICIOS DE CALIDAD

La Ley de Concesión de Obra Pública y la política estatal de entregar a capitales privados grandes porciones de la inversión y provisión de ser-

vicios estatales fue la respuesta que los políticos y empresarios dieron al desfinanciamiento del presupuesto estatal para construir y mantener la obra pública, producido por su propia agenda neoliberal.

Esta misma ley y modelo ha sido desde sus inicios un portillo permanente de corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento de los políticos a costa de los impuestos que pagamos todos los trabajadores.

Ante esto planteamos:

Derogatoria de la Ley de Concesión de Obra Pública para que el Estado sea el que construya la infraestructura necesaria y garantice todos los servicios públicos de calidad.

Que el Estado construya obra pública sin concesiones ni endeudamientos, y bajo la fiscalización de los trabajadores para que no exista corrupción ni clientelismo. Que estas obras se financien mediante el cobro de impuestos a los empresarios y la suspensión del pago de la deuda que el país ha contraído para sostener sus exoneraciones fiscales durante tantos años.

Nacionalizar todas las obras que ya fueron concesionadas como carreteras, puertos y aeropuertos.

Anulación inmediata de todas las concesiones efectivas y en curso que privatizan los servicios y la obra pública (seguridad, servicios de salud, etc.), sin ninguna indemnización para las empresas. Que el Estado asuma toda la obra y servicios públicos que han sido concesionados, y que los trabajadores fiscalicemos que no haya corrupción ni ineficiencia en las mismas.

Nacionalización y control estatal del transporte público para acabar con los oligopolios privados de las grandes autobuseras.

Proponemos exigir a las empresas que congelen el costo de los pasajes y que garanticen pasaje gratuito a los estudiantes, desempleados y pensionados. De lo contrario, proponemos que se les quite la concesión y que el Estado garantice el servicio a costo, nacionalizando sus instalaciones y unidades de transporte. Así tendríamos un servicio de mejor calidad y más barato.

Renacionalización de las cementeras, telecomunicaciones, de todas las empresas y recursos públicos abiertos a la competencia o privatizados.

Proponemos la derogación de las concesiones en basura, limpieza, mantenimiento de calles y demás servicios públicos. De esta forma evitamos que drenen millones de colones al mes de fondos públicos que terminamos pagando nosotros. Fácilmente se pueden congelar los precios e incluso abaratar los servicios de esta forma.

SUSPENSIÓN DE LA DEUDA Y REFORMA FISCAL QUE LE COBRE A LOS RICOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PAÍS

El capitalismo costarricense se ha construido dando múltiples beneficios a las grandes empresas imperialistas, sobre todo incentivos fiscales a través de la Ley de Zonas Francas. La riqueza producida en el país sale con rumbo hacia los bancos extranjeros y no a manos de quienes lo produjeron: los propios trabajadores.

Con la aprobación del TLC y la política fiscal a favor de los ricos, el Estado ha dejado de percibir miles de colones en impuestos, el mismo gobierno calcula en 8,2% del PIB la evasión fiscal.

Mientras el gobierno deja de cobrarle a los ricos y a las grandes empresas transnacionales, garantiza el funcionamiento de los restos del Estado endeudándose con el capital financiero internacional, emitiendo bonos de deuda externa e interna que luego son comprados por otros empresarios y ricos. Estos bonos son pagados con jugosos intereses por el Estado. Para el año 2017, en servicio de deuda se gastaba el 32% del presupuesto nacional, más de lo que se gasta en educación.

Ante ello proponemos:

Suspensión inmediata de los pagos de la deuda para usar ese dinero en educación, salud, trabajo y vivienda para todos.

Una auditoría de la deuda para determinar cuánto corresponde a acreedores privados y a negocios corruptos.

Estamos a favor de que las organizaciones sindicales y populares realicen una auditoría de la deuda y definan sus tramos ilegales. Es muy importante señalar que tramos enteros de la deuda interna y externa son presumiblemente corruptos, préstamos contratados por el gobierno que han terminado en grandes "chorizos".

Expropiación y nacionalización bajo control de los trabajadores de las empresas vinculadas al negocio de la deuda interna y externa.

Una reforma fiscal que grave la renta de las grandes empresas principalmente y acabe con todos los regímenes de privilegios que existen en el país.

Fin del régimen de zonas francas y de los privilegios que permiten a grandes empresas no pagar impuestos.

Cárcel y expropiación a los evasores, impuestos a los ricos para financiar las necesidades el pueblo.

Ni IVA ni recortes al presupuesto público contra los trabajadores.

A principios del año 2017, el déficit fiscal era de 5,2% del PIB. Sin embargo, el Semanario Universidad calculaba que en el año 2013 el Estado dejaba de percibir 5,93% del PIB producto de exoneraciones fiscales. Todo el tejido empresarial está cubierto de exoneraciones fiscales. El mismo diario calculaba que las exoneraciones en el impuesto de renta podían alcanzar el 1,8% del PIB y 0,44% al régimen de zonas francas. Es decir, en este país los más ricos no pagan impuestos.

En contraparte, la política de los gobiernos del PUSC, PLN y PAC ha sido cobrarle más impuestos al pueblo y de aumentar el IVA a un 14% o 15%; es decir, gravar el consumo y los servicios que usan los sectores populares.

UNA REFORMA AGRARIA QUE GARANTICE TIERRA PARA LOS CAMPESINOS Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

Existe una política de Estado, compartido por todas las fuerzas burguesas, de promover y proteger el latifundio agrocapitalista. Nuestras tierras productivas están controladas por grandes latifundios de café, caña, banano, piña y palma, donde el 63,44% de la tierra cultivada en el país está dedicada a estos productos. El 57,7% de toda la producción agrícola tiene el objetivo de ser exportada, no se usa para alimentar al pueblo.

Cinco grandes transnacionales controlan el 80% de la exportación de banano. Para el año 2000 había 9000 hectáreas de piña; hoy se denuncia que hay 58 000 hectáreas sembradas, tanto como el cantón de Carrillo en Guanacaste. Todas son grandes empresas, pues hay 108 grandes fincas de más de 100 hectáreas que representan el 91% de los sembradíos de piña. Entre el año 2000 y 2006 (antes de la crisis económica mundial) la tasa de rentabilidad del agronegocio era de 80% o 100% de retorno.

Frente al gran latifundio capitalista en función de la exportación de monocultivos que han destruido la economía campesina, proponemos:

Una reforma agraria radical que entregue la tierra a quien la trabaja, y que garantice la producción de alimento barato para todos los trabajadores y el pueblo.

Una política de créditos, subsidios, construcción de caminos, asistencia

técnica y cooperativización del campo para garantizar la soberanía alimentaria.

RECUPERACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS EN MANOS DE CAPITALES EXTRANJEROS O NACIONALES

El TLC hizo que muchas de las riquezas y recursos del país pasaran a manos privadas.

Un ejemplo de eso es el control de la telefonía celular. Al respecto, el periódico El Financiero señala lo siguiente: “la cuota de mercado del ICE cayó del 62% en el 2014 al 58% en el 2015. El Instituto tenía el 90% del mercado en el 2011 y 73% en el 2012”. La privatización de la electricidad venía de antes: para el año 2014 había 34 proyectos privados que representaban el 14,5% de la generación de electricidad.

Nuestro programa es recuperar, sobre la base de la nacionalización y el control obrero de la producción, los recursos estratégicos del país: electricidad, el cemento, el plástico, el petróleo y el gas, los seguros, los recursos del subsuelo, del mar, los bosques, etc.

Ante ello proponemos:

Frenar y revertir la privatización de las telecomunicaciones y la energía para que estos recursos sean 100% nacionales.

Renacionalizar los seguros, es decir expropiar las 12 empresas privadas de seguros que compiten con el INS.

ROMPER CON EL TLC PARA GARANTIZAR LA SOBERANÍA NACIONAL

El PLN y demás partidos del empresariado han embarcado al país en la firma de Tratados de Libre Comercio con grandes potencias económicas como Estados Unidos, China y la Unión Europea. Con tal de aprobar dichos acuerdos, en particular el TLC con Estados Unidos, empresarios y partidos del “Sí” prometieron la creación de 60 mil nuevos empleos por año y la posibilidad de que pequeños productores tuvieran las puertas del mercado estadounidense para exportar.

Lo cierto es que hoy, luego de casi 5 años de aplicación de dicho TLC, estas promesas no solo han demostrado su falsedad, sino que el “libre comer-

cio” no ha parado de enriquecer a los más ricos, empobrecer cada vez más al pueblo trabajador y hacer que el país dependa económicamente cada vez más del imperialismo gringo.

Los Tratados de Libre Comercio, en particular el TLC con Estados Unidos, son hoy un tema del que ningún partido quiere hablar. Los partidos del Sí ya ni lo mencionan, mientras que partidos como el PAC y el FA han convertido su NO al TLC en un recuerdo de una lucha y no una necesidad vigente hoy.

Para nosotros, romper con los TLC representa la única manera de rescatar al ICE de la quiebra, de recuperar nuestra soberanía alimentaria y llevar verdadero alivio al pequeño productor. También es un primer paso innegociable para que el país, a través del cobro de impuestos al comercio, pueda tener la independencia que necesita para planificar su propio desarrollo al servicio del pueblo trabajador.

NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

El femicidio, la expresión más brutal de la violencia contra la mujer, fue en Costa Rica la causa de muerte de 303 mujeres entre el 2007 y lo que va del 2017. En su mayoría estos actos son cometidos por un hombre cercano a la víctima que a menudo es la pareja, el padre, algún conocido o pariente. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el 81% de los de los culpables de los femicidios en los últimos 10 años fueron hombres que convivían en el mismo hogar de las víctimas.

Este hecho es alarmante cuando se considera que solo un 45% de las mujeres son parte de la fuerza laboral del país y que, según la Encuesta Nacional de Hogares, casi la mitad de las mujeres emparejadas dependen económicamente de sus parejas. La única forma en que las mujeres salgan de los ciclos de violencia que hoy las están matando es necesario generar posibilidades reales de empleo para su independencia económica; servicios de cuidado infantiles para poder trabajar; vivienda digna para no ser víctimas de violencia, así como acceso a educación pública y de calidad para tener más y mejores oportunidades.

En la violencia contra la mujer el Estado también es culpable; en la última década se presentaron 132 medidas de protección diarias. No obstante, esas medidas, basadas principalmente en restringir la cercanía del agresor, no son suficientes ya que no representan una protección real para muchas mujeres.

Aunque la violencia afecta a todas las mujeres independientemente de la clase social a la que pertenecen, las mujeres de clase trabajadora tienen mayores dificultades para salir de esta, ya que muchas dependen económicamente de sus parejas o no cuentan con acceso a información y

servicios de apoyo que les permitan salir de esas relaciones.

Por eso proponemos:

Trabajo digno, educación y vivienda propia para no ser víctimas de violencia. Las mujeres deben tener las condiciones necesarias para ser independientes económicamente de sus agresores y para tomar decisiones libres que les permitan salir de los ciclos de violencia.

Ampliación de los programas de atención a las mujeres víctimas, para que se garantice el acceso a atención médica, jurídica y psicológica.

Por aumento de albergues que garanticen la seguridad de las mujeres y sus hijos .

Protección inmediata y efectiva para las víctimas de violencia y castigo para los agresores.

Campañas educativas dirigidas a la población en contra de la violencia, el machismo y cualquier tipo de opresión.

¡Alto a la violencia machista! ¡Ni una menos!

POR EL DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR SOBRE SU PROPIO CUERPO

Son múltiples los factores que pueden llevar a una mujer a tomar la difícil decisión de abortar. Algunas deciden hacerlo porque fueron víctimas de violación, porque viven en condiciones de violencia en las que no desean tener hijos o porque su embarazo no ha sido deseado. Pero también el incumplimiento de derechos laborales relacionados con la maternidad, la falta de centros de cuidado y la carencia de servicios para la atención de la niñez en general, colocan a muchas mujeres ante difíciles situaciones económicas y personales que las llevan a interrumpir sus embarazos.

Las condiciones de ilegalidad del aborto no impiden que miles de mujeres alrededor del mundo lo practiquen, siendo las de más recursos económicos quienes tienen posibilidades de recurrir a proveedores de salud capacitados, mientras que las mujeres pobres se someten a condiciones precarias para abortar, muchas veces con secuelas físicas y psicológicas. Las condiciones de clandestinidad dificultan el acceso a información confiable, a consejería y a métodos profesionales con condiciones adecuadas.

En el PT defendemos el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, y creemos que la salud y la vida de las mujeres no puede ser un privilegio exclusivo de quienes cuentan con recursos económicos para pa-

garse servicios médicos privados, sino un derecho de todas las mujeres.

Por eso proponemos:

El acceso de todas las personas a la educación sexual laica y científica para que puedan tomar decisiones sobre el control y manejo de su sexualidad.

La realización de campañas en temas de sexualidad en barrios y centros de trabajo.

El acceso gratuito a anticonceptivos de calidad, incluida la anti-concepción de emergencia.

Que la interrupción voluntaria del embarazo sea garantizada de manera gratuita por el sistema de salud, para que ninguna mujer muera o sufra las consecuencias de los abortos clandestinos.

PLENOS DERECHOS PARA LA POBLACIÓN LGBTI

En el PT tenemos como principio la lucha contra el machismo, el racismo y la LGBTIfobia. Entendemos que la lucha contra la explotación capitalista es inseparable de la lucha contra las diferentes formas de opresión, y sabemos que no es posible luchar contra la opresión sin luchar contra el capitalismo.

La primera muestra de la discriminación y la invisibilización para la población LGBTI en nuestro país es que no se cuenta con estudios o censos para tener un estimado del tamaño y composición de la población LGBTI. Únicamente se cuenta con datos muy generales como los que se desprenden del censo de 2011, en donde se indica que en Costa Rica vivían ese año 4.301.712 personas: 2.106.063 hombres y 2.195.649 mujeres. Sin embargo, no es posible saber cuántas de estas personas son gays, lesbianas, bisexuales, trans o intersex.

En la realidad, las personas tienen diferentes derechos dependiendo de su orientación sexual, como el acceso a la vivienda, trabajo, servicios de salud e inclusive a ser reconocido por su propio nombre. Desde el Partido de los Trabajadores, estamos en contra de todo tipo de discriminación por temas de orientación sexual y por eso somos consecuentes con ello en nuestro programa.

Por eso proponemos:

Legislación que garantice la igualdad de derechos y que combata efectivamente la discriminación contra la población LGBTI.

¡Matrimonio igualitario YA! Con extensión de todos los derechos concedidos a las parejas heterosexuales.

Por el derecho de adopción para parejas del mismo sexo y reconocimiento de la licencia de maternidad/paternidad.

Derecho al uso del nombre social a trans en documentos, órganos públicos y privados, centros educativos, trabajo y sistema de salud. ¡Por el reconocimiento de la identidad de Género YA!

Una educación sexual laica y científica que tome en cuenta la diversidad sexual y brinde la preparación requerida al personal docente.

Acceso a la educación sin ningún tipo de discriminación por orientación sexual.

Por un sistema de salud que atienda de manera gratuita las necesidades de la población LGBTI, incluyendo el tratamiento hormonal, la cirugía de cambio de sexo y el acompañamiento psicológico para trans.

Ampliación de las campañas de prevención de las ETS y VIH, combatiendo la idea de que los LGBTI son grupos de riesgo.

Por el fin de la prohibición de donación de sangre a los homosexuales.

Contra la persecución, humillación, discriminación y despidos de la población LGBTI en los centros de trabajo.

Por el fin de la LGBTIfobia institucionalizada en la Fuerza Pública.

Contra la LGBTIfobia de los medios de comunicación. Castigo para las emisoras y programas televisivos que transmitan programas LGBTIfóbicos.

Realizar un censo y los estudios necesarios para tener la información actualizada sobre la población LGBTI en nuestro país.

POR UN ESTADO LAICO

Para defender un programa como el que proponemos, con la defensa de los derechos de las mujeres y la población LGBTI, es necesario que las políticas públicas respondan al beneficio de los sectores explotados y oprimidos, y no a los intereses religiosos personales que con tanta fuerza se han dedicado a entrabar estos proyectos.

Costa Rica es el único país de América que mantiene una religión oficial, destinando además altas sumas de dinero en transferencias del Estado

a la Iglesia Católica. Tan sólo entre 2010 y 2015, el gobierno giró €3.502 millones a las temporalidades de la Iglesia Católica, de acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda.

Creemos que es fundamental la separación entre iglesia y Estado y por eso proponemos:

Estado laico sin concordato que establezca límites claros entre el Estado y las denominaciones religiosas, para eliminar la intrusión de las religiones en la definición de políticas públicas.

¡NO MÁS DISCRIMINACIÓN DEL GOBIERNO NI DEL PATRÓN CONTRA EL NICARAGÜENSE!

La población inmigrante representa el 9% de la población total de este país, conformando un 11,37% de la población trabajadora asegurada.

La población trabajadora nicaragüense es un sector fundamental que forma parte de las labores en sectores de construcción, turismo, agricultura, manufactura, comercio y demás. A pesar de las labores fundamentales que realizan, se encuentran en condiciones de total desprotección frente a las violaciones a sus condiciones laborales, donde el pago que se les otorga se ubica muchas veces por debajo de los mínimos establecidos por ley (que ya de por sí son insuficientes) y sin ningún tipo de garantía laboral, haciendo uso de estereotipos y argumentos xenofóbicos con los que se intenta "justificar" su sobreexplotación, rebajando los salarios de todos y exigiendo agotadoras jornadas laborales que suman al trabajador nicaragüense y su familia en la miseria.

De esta población una mayoría son mujeres, quienes se desempeñan en los trabajos más precarizados; un 39,4% de las mujeres de la fuerza laboral trabajan como empleadas domésticas, siendo este el oficio que tiene la más baja remuneración salarial.

En el último periodo, los insultos xenofobos agitados por el discurso del gobierno sobre la supuesta invasión de Nicaragua generaron que muchos trabajadores costarricenses, confundidos y angustiados por el deterioro del empleo, de los servicios de salud y de su empobrecimiento, les echaran la culpa a los nicaragüenses. Lo cierto es que estos son argumentos que ocultan la identidad de los verdaderos responsables del deterioro de la vida del pueblo trabajador: los empresarios y sus políticos. Esto crea falsos conflictos entre los trabajadores para mantenernos divididos y facilitar la continuidad de los abusos del patrón.

Frente a estas condiciones, hay situaciones de total indefensión, ya que la inexistente organización sindical en el sector privado (donde fundamen-

talmente trabaja esta población) favorece que se den los abusos. Adicional a esto, aun cuando se les exige cumplir con todas las obligaciones como ciudadanos costarricenses (independientemente de su situación migratoria), y forman parte fundamental de la economía de este país, no se les permite ningún tipo de participación política ni acceso a aspectos básicos como el derecho al voto hasta no haberse naturalizado, por lo que no tenemos manera de influenciar en un cambio que nos beneficie como población discriminada.

A esto hay que sumarle las dificultades del excesivo trámite migratorio, en los que se requiere una validación constante de la documentación en Nicaragua que implican costos de traslado y viáticos. Se calcula que los trámites para obtener la residencia permanente ronda entre los \$700 a los \$1000², y ni qué decir de las contradicciones que presenta la misma ley, donde se requiere permiso de trabajo para empezar a laborar, pero este no es otorgado hasta tanto no se tenga un trabajo garantizado.

Por eso proponemos:

¡Alto a la xenofobia! ¡Todos los derechos para todos los migrantes!

Acceso gratuito a todos los servicios de salud de la CCSS para todas las personas, sin importar su nacionalidad o condición migratoria en el país.

Por un plan de reinserción a las escuelas y colegios para la población migrante.

Por total acceso a las universidades y a la posibilidad de solicitar una beca para estudiar sin importar su condición migratoria.

Por un plan de vivienda digna que incluya a las familias de los trabajadores migrantes y por la posibilidad de acceder a créditos bancarios.

Igualdad de derechos laborales para los migrantes, con cárcel para los patronos que no los cumplan.

Por el aseguramiento en la CCSS y por el pago de la póliza contra riesgos de trabajo independientemente de la condición migratoria.

Por el derecho a formar sindicatos y a ser electos como representantes.

¡Abajo la Ley de Migración! Por la regularización migratoria inmediata de los trabajadores y sus familias.

¡Por el derecho a votar y a ser electos!

CONTRA LA DEMOCRACIA DE LOS RICOS, UN GOBIERNO DE LOS TRABAJADORES

Creemos que para cambiar nuestra situación no basta con votar cada cuatro años o elegir representantes a las actuales instituciones que responden a los ricos que nos oprimen y nos explotan. Nos presentamos a las elecciones porque hace falta una voz que denuncie el papel de este régimen desigual y corrupto al servicio de los empresarios, y que proponga una salida socialista favorable a la clase trabajadora.

En elecciones llamamos a votar por nuestros candidatos planteando la importancia de elegir representantes a la Asamblea Legislativa y al gobierno que expresen la voz de los trabajadores. El PT aspira a elegir representantes no para vender falsas ilusiones electorales, sino para llamar a los trabajadores a movilizarse por sus necesidades.

Nos presentamos a elecciones para llamar a los trabajadores a que dejen de votar por quienes los explotan, bajo la consigna trabajador vota trabajador, mientras les proponemos organizarse para luchar desde su centro de trabajo o barrio para hacer posible sus reivindicaciones.

A diferencia de las organizaciones reformistas, en lugar de crear ilusiones en el orden democrático de los ricos, en los cargos parlamentarios y en elecciones cada cuatro años, proponemos la acción directa de los trabajadores y el pueblo pobre como único medio para cambiar la realidad. Para eso construimos todos los días un partido que sirve no solo para ganar votos, sino especialmente para organizar las luchas de los trabajadores hacia la victoria.

Nosotros proponemos que quien gobierne el país sea la clase obrera y el pueblo pobre en el poder, organizados en consejos populares democráticos de base. Estos consejos son los que pueden en definitiva enfrentar el sistema capitalista depredador y construir desde sus cimientos nuevas instituciones; quitando a los ricos la propiedad de los medios de producción del país y dejando la riqueza en las manos de la mayoría trabajadora que la produce.

Solo con la movilización de los trabajadores y la organización de esos consejos será posible cambiar en definitiva la actual democracia de los ricos, para así lograr construir una forma de gobierno superior que garantice las necesidades del pueblo que trabaja y no de una minoría acaudalada, como ocurre actualmente.

Nosotros vamos a dar la pelea contra la explotación de los trabajadores en todos los terrenos, incluida la Asamblea Legislativa. No le queremos dar tregua en ningún lado a los enemigos de los intereses de la clase trabajadora, por eso queremos tener diputados y por eso presentamos can-

didatos trabajadores y luchadores abnegados sin ningún vínculo con los empresarios. Pero elegir representantes no es nuestro fin último.

Nuestro partido no le promete a la clase obrera fórmulas mágicas para librarla de sus males, sino que se propone dirigir sus esfuerzos a arrancar conquistas y construir otro país socialista. Por eso, siempre decimos que nuestro terreno es la lucha y no las elecciones. Porque para enfrentar los intereses de los patrones, y sus gobiernos, tenemos que enfrentarlos en las calles hasta lograr nuestra victoria que garantice un gobierno de los trabajadores.

LA ÚNICA SALIDA ES UN PLAN SOCIALISTA PARA COSTA RICA Y CENTROAMÉRICA

Desde el Partido de los Trabajadores estamos seguros de que la única forma acabar con la crisis en la que nos han metido los grandes capitalistas es mediante una salida y un programa socialista. Esto consiste centralmente en que toda la riqueza que producimos los trabajadores se dedique a satisfacer nuestras necesidades y no a engordar los bolsillos de los ricos.

Para esto es necesario planificar y regular la economía en función de las necesidades e intereses de la clase trabajadora. El sometimiento de la economía de nuestro país a las “necesidades del mercado” es en buena parte culpable del aumento de la miseria y la dependencia. Nuestro país no puede salir de esta situación y construir una economía que permita satisfacer nuestras necesidades si seguimos dejando que los empresarios hagan y deshagan a su antojo.

Esta regulación no se puede realizar en tanto los principales medios de producción (las tierras, las fábricas, la maquinaria) estén en manos de un puñado de empresarios. Por esta razón nuestro partido plantea la necesidad de nacionalizar y recuperar los medios de producción, de ponerlos a producir bajo el control del pueblo trabajador y en función de sus necesidades.

Esto no es más que recuperar para el pueblo trabajador la fortuna que ha salido de su propio trabajo y de su propio esfuerzo. Significa nacionalizar los medios de producción y regularlos socialmente para garantizar mejores condiciones de trabajo; producir puestos de empleo, invertir la riqueza del país en mejorar el nivel de vida de la mayoría y hacer que cese el saqueo de las transnacionales en nuestro país. De esta forma, nuestro país puede utilizar sus recursos para dejar de ser dependiente de los vaivenes del mercado y de los caprichos transnacionales.

No estamos proponiendo que el país cierre sus fronteras, sino que haga

valer su soberanía plenamente. Nuestras propuestas tampoco rechazan la integración económica, simplemente proponemos una integración bajo bases completamente distintas. La actual "integración" supone la subordinación de nuestra economía y nuestros recursos al imperialismo. La actual "integración" se basa en la depredación del medio ambiente y los recursos, y en una competencia irracional en la que siempre ganan los ricos y pierden los trabajadores.

Para llevar a fondo este programa creemos que es necesaria una profunda integración con el resto de la región centroamericana, pero proponemos que esta se base en la solidaridad y la cooperación. Esto solo puede ser posible con una ruptura de la región con el imperialismo y sus tratados, y con la construcción de gobiernos de la clase trabajadora en estos países.

La región centroamericana se encuentra profundamente unida a nivel histórico, económico, político y social. El imperialismo hace planes para la región, los empresarios discuten e invierten su capital para explotar a los trabajadores pensando en el conjunto de la región. Sin embargo, permanentemente tratan de dividir a los trabajadores centroamericanos bajo nacionalismos vacíos. Solo la unidad de los trabajadores centroamericanos podrá dar una salida a los problemas que vivimos los trabajadores de toda la región.



2017

